

Politización del campo mediático y democracia en la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez

Kitzberger, Philip

Veröffentlichungsversion / Published Version
Zeitschriftenartikel / journal article

Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with:
GIGA German Institute of Global and Area Studies

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:

Kitzberger, P. (2012). Politización del campo mediático y democracia en la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez. *Iberoamericana*, 12(47), 187-192. <https://doi.org/10.18441/ibam.12.2012.47.187-192>

Nutzungsbedingungen:

Dieser Text wird unter einer CC BY-NC-ND Lizenz (Namensnennung-Nicht-kommerziell-Keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden Sie hier:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de>

Terms of use:

This document is made available under a CC BY-NC-ND Licence (Attribution-Non Comercial-NoDerivatives). For more Information see:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0>

Philip Kitberger

**Politización del campo
mediático y democracia en la
Revolución Bolivariana de
Hugo Chávez**

La Venezuela de Hugo Chávez forma parte de esas experiencias gubernamentales de la nueva izquierda latinoamericana

que han inaugurado un inusitado ciclo de politización en el que se rediscuten –no sin fuertes confrontaciones y controversias– estructura, roles, regulación y reforma legal democrática en el campo mediático.

Existen antecedentes de contrahegemonismo mediático e intentos reformistas –en respuesta al histórico dominio del comercialismo, del capital (extranjero), de las *oligarquías* o de la *derecha*– en las experiencias del populismo y la izquierda del siglo xx en América Latina. El cardenismo, el peronismo, la Revolución Nacional en Bolivia, el gobierno de Velasco Alvarado o el Chile de Allende, contienen ejemplos evocables de tales ofensivas.

Sin embargo, con el llamado *left turn* del período posneoliberal estas iniciativas contrahegemónicas cobrarán una centralidad política que parece ser función de una acrecentada –real o imaginada– relevancia política de los medios de comunicación.

Chávez ha sido, en cierto modo, quien ha inaugurado esta ola. Sus tácticas de confrontación pública con los medios parecen haber ampliado el muestrario de opciones políticas disponible ante los demás. No obstante, cada caso nacional presenta, visto de cerca, múltiples inflexiones que son función de determinados factores locales como la estructuración histórica de la relación política-medios.

En la esfera mediática el proceso de la Revolución Bolivariana se ha destacado por su radicalismo. En general, este carácter refundacionalista ha sido atribuido al colapso del sistema político venezolano y a la profundidad de la crisis de representación en la que se produjo el ascenso de Chávez. Análogamente, la clave explicativa del radicalismo mediático puede vincularse a los avatares de la credibilidad de las instituciones mediáticas. La actuación de los grandes medios televisivos y de prensa durante la crisis de abril de 2002 constituye una coyuntura crítica a partir

del cual se observan realineamientos y una movilización radical y novedosa respecto del patrón histórico de la relación política-medios.

Durante buena parte del siglo xx, la renta petrolera mantuvo al Estado como el principal actor en la economía venezolana. Por esta razón, las élites gobernantes dispusieron históricamente de un gran ascendente frente a los demás actores sociales. Más que en otros países de la región, ocupar el Estado significó siempre contar con los recursos para disciplinar y alinear actores sociales. En este marco funcionaron también las relaciones entre élites políticas y mediáticas durante la democracia surgida del Pacto de Punto Fijo. La alternativa entre cooptación e inviabilidad explica la estructuración de vínculos entre los editores de los principales periódicos y los liderazgos de AD y COPEI. En los casos en que el esquema de prosperidad a cambio de deferencia se rompió, la opción de los actores periodísticos no pasó por la oposición sino por la sedición, respondida desde el Estado, eventualmente, por medio de medidas coercitivas.

A partir de los años ochenta el impacto en la renta petrolera impuesto por las bajas e inestabilidad del crudo, alterarían el equilibrio entre élites políticas y mediáticas. La merma en la capacidad estatal afectó el prestigio del *establishment* político puntofijista. La subordinación deferente dio lugar a una actitud más autónoma y agresiva por parte de empresarios televisivos y editores periodísticos.

Dichos cambios en las relaciones de poder estuvieron a su vez condicionados por transformaciones del campo mediático. Desde 1959 se exiliaron en Venezuela un importante número de empresarios (la familia Cisneros entre ellos), técnicos y profesionales de la precoz televisión cubana. Éstos acrecentaron el desarrollo de una

industria que de por sí experimentó un auge regional en los setenta. Con la presidencia de Lusinchi se iniciaría un proceso de liberalización, concentración y expansión en el sector radiotelevisivo, en especial la industria televisiva, convertida en tercera en facturación en Latinoamérica durante los noventa. Sobre esas plataformas encontraría espacio un periodismo de imagen modernizada, convertido en arma político-corporativa controlada por estos nuevos grandes empresarios, entre los que destacarían el Grupo Cisneros (Venevisión) y el grupo Phelps/Granier (RCTV).

En especial después del Caracazo, en 1989, se generalizó en los medios una corrosiva crítica de la clase política que aportó a la disolución del sistema bipartidario. Los medios colaboraron así con el derrumbe de la democracia puntofijista y por ende, pese a no haberlo apoyado, con la victoria electoral de Chávez en 1998, el carismático *outsider* que había irrumpido a la escena pública con el levantamiento militar de 1992. Desde su llegada a la presidencia, Chávez sostuvo una relación confrontativa con medios y prensa, lejos, no obstante, de la radicalización posterior a la crisis del “paro cívico”, golpe y paro petrolero de 2002-2003.

La Constitución sancionada en 2000 supuso una reafirmación del rol del Estado como garante de derechos y amplió los mecanismos de democracia participativa sin abandonar, no obstante, la institucionalidad de la democracia representativa en lo sustancial. En el ámbito comunicativo, recogiendo debates reformistas en los que Venezuela tuvo cierto protagonismo en los setenta, amplió la definición de libertad de expresión y reconoció –sin afectar la legitimidad del lucro– al Estado y al sector privado no comercial como actores legítimos del espacio mediático. En consonancia, la Ley de Telecomunicaciones de 2001, en contraste con el avance estatal en

el sector de hidrocarburos, hacía importantes concesiones a los intereses del sector privado comercial en radio y telecomunicaciones, a la vez que dotaba de estatuto jurídico al sector comunitario.

Pero pulverizados los partidos, los medios privados se convirtieron en foro e imán de la oposición, exacerbando su rol político desde el mismo inicio de la presidencia de Chávez. Totalmente excluidos de la llegada al Estado desde el recambio del elenco político, y como parte de un clima general de polarización creciente, los grandes medios –alineados y abandonando progresivamente todo vestigio de autonomía periodística y de la lógica de la información– llegaron hasta el paroxismo con la actitud de anteponer sus agendas políticas, económicas y de clase. Los cinco principales canales de televisión y la mayoría de los diarios fueron confluyendo así en el objetivo de deslegitimar y destituir al gobierno. Embarcados en una agresiva campaña en la que no se ahorraron prácticas reñidas con los estándares periodísticos, polarizaron la relación con el gobierno iniciando una espiral confrontativa en la que el gobierno no dejó de redoblar apuestas.

A lo largo de esta primera etapa, los medios privados confrontados con el chavismo dominaban las ondas radioeléctricas y el espacio mediático en general. Carente de estrategia comunicacional, el gobierno apenas contaba con las débiles señales estatales de radio (RNV e YVKE) y televisión (VTV), de un trato más cordial por ciertos medios alternativos (la cadena cristiana Fe y Alegría y Catia TV), además del apoyo de unos pocos periódicos. Este escenario cambiaría radicalmente después de la crisis política de 2002-2003.

El núcleo conspirador comenzó a articularse a fines de 2001 con los líderes de la organización patronal (Fedecámaras),

sindicales (CTV), sectores militares, tecnócratas de PDVSA y un bloque coordinado de prominentes miembros del *establishment* mediático como Marcel Granier, Gustavo Cisneros, Guillermo Zuloaga (Globovisión) y Miguel Enrique Otero (director de *El Nacional*), además de presentadores y periodistas estrella como Rafael Poleo e Ibéyise Pacheco. Más allá de los llamamientos directos de los espacios editoriales, los canales pasaron a cubrir en forma continuada y exclusiva la huelga general y la movilización opositora de principios de abril, manipularon la información sobre abastecimiento y silenciaron completamente las voces del gobierno. El gobierno intentó contrarrestar esta cobertura invocando cadenas que fueron eludidas dividiendo la pantalla. El 11 de abril los canales transmitían las conferencias del núcleo golpista que pedía la renuncia al presidente, mientras —por medio de un montaje de edición deliberado— se mostraba a militantes chavistas disparando contra la multitud opositora. Por la noche los conspiradores lograron cortar la transmisión del canal estatal, único medio controlado entonces por el gobierno. En una operación comandada por Pedro Carmona desde las oficinas de Venevisión, Chávez fue detenido en la madrugada del 12 de abril. Los medios dieron a conocer su “renuncia” y, sin proceder a verificar la información, celebraron al nuevo gobierno. Al día siguiente, sin embargo, oficiales leales a Chávez retomaron el control de la situación, y sus partidarios, predominantemente de los barrios populares, se volcaron masivamente a la calle coordinados por algunos medios alternativos y por la incipiente telefonía celular. Repentinamente los medios produjeron un verdadero *apagón* informativo al poner en el aire deportes, telenovelas y dibujos animados en lugar de reportar los acontecimientos relevantes

que ocurrían en la calle y en los cuarteles. El día 14, resquebrajada la coalición golpista, luego de que grupos de medios comunitarios amparados por miembros de la guardia presidencial retomaron la transmisión del canal estatal, Chávez fue repuesto en el palacio de Miraflores.

La abierta opción insurreccional de los grandes medios en abril de 2002 marcó un punto de inflexión. El involucramiento expuesto de sus propietarios en la conspiración afectó significativamente la credibilidad pública de los medios privados. La brecha de confianza abrió el espacio político para una radicalización del contrahegemonismo mediático chavista modelada, en buena medida, en respuesta a la experiencia de desestabilización.

Algunas orientaciones preexistentes se institucionalizaron. Si bien comenzó en radio en 1999 y pasó a la televisión en 2000, *Aló presidente* se consolidó —más allá de su función como dispositivo de comunicación directa— como un espacio regular desde donde hacer pública la denuncia y deconstrucción de los medios en clave de sus intereses.

El gobierno no tuvo igual en cuanto a protagonismo estatal en la creación de medios. Además de relanzar las estaciones de radio y televisión preexistentes (RNV y VTV), la administración creó otros dos canales televisivos de amplia cobertura (ViveTv y Tves). La red de radio estatal se amplió considerablemente (existían 79 FM públicas en 2009), además de varias experiencias de prensa gráfica estatal. En consonancia con su visión geopolítica, el gobierno bolivariano es el principal sostén de Telesur, la red regional de noticias orientada a la integración y la guerra contra el dominio informativo regional de vehículos como CNN. Si bien se abrieron importantes espacios que incorporaron voces, agendas, contenidos y experiencias participativas, una parte importante de

estos espacios se alineó en el oficialismo arrastrado por el enfrentamiento polarizado con la oposición. Los medios comunitarios, por su lado, pasaron de la inexistencia legal en 1998 a detentar 243 concesiones de radio y 37 de televisión en 2009, además de contar con programas estatales de equipamiento y asistencia. Pese a estas importantes novedades en el paisaje mediático y al declive en el ritmo de concesiones a los actores comerciales, éstos siguen siendo mayoritarios en el éter en cuanto a vehículos, facturación y audiencia (un 90% de la tasa de encendido televisivo aproximadamente).

En 2004 se sancionó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte. Esta norma establece un marco de actuación de los concesionarios fuertemente orientado a la regulación de contenidos. Su disposición más polémica, el artículo 29, prevé severas sanciones para quienes “promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; [...] a alteraciones del orden público [...]; al delito; sean discriminatorios; promuevan la intolerancia religiosa; [...] sean contrarios a la seguridad de la Nación”. Esta regulación de la libertad de expresión está motivada —explícitamente— en la memoria fresca de la incitación a la desobediencia, a la violencia y el golpismo mediático de 2002. Los críticos de la ley afirman que la ambigüedad en la definición de las sanciones y de las propias conductas interdichas deriva en niveles de discrecionalidad y arbitrariedad que, sumado al control de las agencias regulatorias por el Ejecutivo, promueve la (auto)censura y la disuasión en la emisión de información y opinión. Así, esta cuestión es una de las que más han erizado la relación del gobierno bolivariano con los organismos internacionales.

En 2007, el gobierno no renovó la licencia de RCTV, la red de televisión más antigua y la de mayor audiencia. Lo

mismo sucedió con otras 34 concesiones de radio y televisión. El oficialismo alegó incumplimientos e invocó su derecho como poder concedente de no renovar una licencia para utilizar canales radioeléctricos. La medida produjo protestas de organismos internacionales, gobiernos y ONG, así como desde algunas voces sociales y políticas hasta entonces cercanas. Muchas de estas voces críticas arguyeron que la justificación de la caducidad en el antecedente golpista no cuaja con la renovación de concesión a Venevisión, igualmente protagonista de 2002, producto de un pacto con Cisneros de retraer la movilización opositora de la pantalla a cambio de la subsistencia. Ante los ojos de muchos, apareció entonces como una retaliación política y una amenaza grave a la libertad de expresión. Por otra parte, de las manifestaciones que surgieron en respuesta a la medida emergió un movimiento estudiantil que jugaría, de ahí en más, un rol relevante en la reorganización de la oposición política.

Así, desde la oposición, la política de medios de Chávez se ha convertido en uno de los principales tópicos en la denuncia de la deriva autoritaria del régimen. En el otro extremo del polarizado espacio político venezolano, se lee el proceso en modo inverso. En el campo chavista, y en particular en sus sectores más radicalizados, el golpe mediático de 2002 es interpretado como un punto de inflexión que produjo reacciones en la conciencia de los oprimidos y motorizó un proceso de democratización sin precedente en un espacio históricamente dominado por los sectores sociales dominantes.

El caso de la salida del aire de RCTV y las otras no renovaciones reflejan las diferentes concepciones de la libertad de expresión y la democracia en cuestión. Muchas de las críticas se han centrado en el argumento según el cual el cierre de un

medio supone lisa y llanamente un silenciamiento y por lo tanto un injustificable cercenamiento a la libertad de expresión. Dicho razonamiento asume tácitamente que el espacio público es infinito y que el ejercicio del derecho a la expresión es no rivalizante o no escaso y que la no interferencia en la esfera privada es el pilar de la libertad de expresión. Pero como destaca Owen Fiss, en condiciones de amplias desigualdades de poder social, el ejercicio de la libertad de expresión que hace al proceso de autodeterminación política, puede requerir y justificar interferir el espacio de la autonomía privada. La cantidad de puntos de vista que pueden hacerse audibles en la esfera pública mediática —en especial, aunque no sólo, por la naturaleza del espectro radioeléctrico— es necesariamente limitada—. El espacio mediático tiene una frontera de Pareto: llegado un punto, la inclusión de una nueva voz requiere la disminución de la capacidad de hacerse oír de otra. Que intervenga la política —y no el mero mercado— en la determinación y regulación de qué voces —rivales— pueden tener acceso al espacio mediático no parece ser objetable en sí.

La libertad política democrática y el espacio público mediático que requiere su ejercicio, puede requerir y justificar, entonces, la interferencia estatal sobre unos intereses privados que deben estar subordinados al imperativo de igualar el acceso de los ciudadanos a la información y la capacidad de individuos, identidades, e intereses colectivos relevantes para hacerse oír públicamente. Democratizar significa en este caso, desacoplar acceso, representación de voz y otras capacidades relativas al ejercicio de la libre expresión respecto de las asimetrías de poder económico, social y político.

Sin embargo, en Venezuela los resultados de la intervención política a favor de esfera pública más democrática se presen-

tan, hasta donde puede verse, ambivalentes. El protagonismo estatal ha abierto sin duda el espacio mediático a voces y expresiones alternativas a los contenidos dictados por lógicas comerciales, tanto por la gran multiplicación de medios comunitarios como por la aparición de espacios en la plétora de nuevos *outlets* público-estatales, entre los que cabe destacar la experiencia participativa de ViveTV. No obstante, estas alternativas no han logrado desplazar a los medios privados de la hegemonía sobre las audiencias masivas. En lo que hace al debate público, la fuerte polarización determina que una porción significativa de estos nuevos espacios sustraídos a la lógica comercial, termina siendo ocupada por voces oficialistas verticalizadas. El problema no es tanto su presencia —necesaria y justificada, por cierto— como el que la lógica binaria que entablan con la oposición (de los medios privados) empobrece las condiciones del debate democrático.

La dependencia directa y con pocas mediaciones de las autoridades regulatorias que deciden sobre licencias y contenidos respecto de un Ejecutivo inmerso en las descritas ofensivas, ha suscitado, cuando menos, importantes dudas. Una legítima interferencia pública democratizadora debe tender a observar reglas distributivas de acceso mediático libres de toda sospecha de constituir mecanismos velados de retaliación o negociación política.

Philip Kitzberger es investigador del Conicet (Argentina) y profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Desde 2010 realiza estancias de investigación en el GIGA-ILAS de Hamburgo con una beca Georg Forster de la Fundación Alexander von Humboldt. Correo electrónico: pkitzberger@utdt.edu.